

Sobre la legitimidad y la legitimación

Por Eduardo Posada Carbó

“Así sea triste reportarlo”, escribió la periodista Ana Carrigan en el *New York Times*, “no hay buenos (good guys) en el cuadro de la guerra colombiana”. Según Carrigan, la guerrilla no es la causa de nuestros problemas, sino el “síntoma de un mal nacional profundamente enraizado en un corrupto sistema político”. En conclusión, no habría “un socio legítimo para los Estados Unidos en este conflicto”.ⁱ

Si la opinión de Carrigan fuese apenas un comentario aislado en un periódico cualquiera, tal vez no merecería mayor atención. Sin embargo, estas descalificaciones del Estado colombiano - de su sistema político, su régimen democrático, sus gobernantes -, se enraizaron en ciertos medios durante las últimas décadas. Y tales conceptos aparecen publicados en periódicos de tanta influencia como el *New York Times*. Nótese, por ejemplo, la observación de un informe reciente de la revista *Time*: “dada la épicamente inútil y corrupta clase dirigente colombiana, muchos en Washington se preguntan si los Estados Unidos no estarían desperdiciando su dinero en esta oligarquía”.ⁱⁱ

Importa advertir que lo que está bajo cuestionamiento en tales juicios, formulados en términos absolutos, es, nada más y nada menos, que la misma legitimidad del Estado colombiano, es decir, la validez del ejercicio del poder por parte de quienes gobiernan.ⁱⁱⁱ Del desconocimiento de los títulos para gobernar se desprenden mensajes que mal podrían tomarse a la ligera: a los ojos el mundo externo, el país sería tratado como un paria; internamente existirían justificaciones ya sea para desobedecer a las autoridades, ya para la rebelión armada. Pero cualquier reclamo de legitimidad de la rebelión armada tampoco encuentra justificación alguna, sobre todo por la bárbara conducta de los grupos guerrilleros - su adopción creciente del terrorismo - y su manifiesta falta de representación o apoyo popular.

Quienes adoptan la perspectiva de los informes citados estarían aceptando lo que Jesús Antonio Bejarano llamara “el juego de las ilegitimidades”, en el que colocan al Estado y a la guerrilla en un mismo plano, equiparación que Bejarano, con razón, encontraba inaceptable.^{iv} En otros trabajos he señalado cómo los términos “ilegítimo” e “ilegitimidad”, para referirse a la totalidad del Estado colombiano, no le hacen justicia a su estructura compleja, ni a sus logros, ni a las conquistas democráticas de nuestra historia.^v Poco se alcanzan a percibir los nefastos efectos del abuso de tan generalizada descalificación: desestimulan los esfuerzos genuinamente reformistas, provocan aislamientos internacionales, y tienden a legitimar, implícitamente, las acciones criminales de los enemigos del Estado.

La mayoría de los trabajos sobre a legitimidad enfocan el problema desde la perspectiva de la aceptación normativa o social de un régimen político específico o de quienes gobiernan. Hay otro aspecto, sin embargo, al que no se ha prestado mayor atención pero que puede ser de igual o mayor significado, examinado de manera sistemática por el profesor del London School of Economics, Rodney Barker: el papel de las autoridades no como sujetos sino como objetos del proceso legitimador.^{vi}

Según Barker, quien prefiere el concepto de “legitimación” al de “legitimidad”, la finalidad central de las acciones legitimadoras del poder no es convencer a los súbditos o a los ciudadanos sino a los mismos gobernantes de su propia autoridad. La legitimación, dice Barker, “es una actividad auto-justificante característica de quienes gobiernan, emprendida con gran intensidad en el centro del gobierno y que tiene como principales consumidores a aquellos dedicados al negocio de gobernar”.^{vii} En términos gráficos, sobre la ritualidad del poder, “los palacios presidenciales se hacen para impresionar a los presidentes y no a los ciudadanos”.

Se podrían distinguir tres auditorios en el ejercicio de la legitimación: el “príncipe” – las cabezas del gobierno -: sus “primos” – los niveles secundarios del gobierno o quienes inmediatamente lo rodean; y los “súbditos” – los ciudadanos, el pueblo. Barker sugiere que, entre éstos, el mismo “príncipe” es quizá el auditorio más importante, seguido de sus “primos”. En contra de creencias comunes, los “súbditos” tendrían una relevancia menor como receptáculos de la “legitimación” que el propio gobierno.

La legitimación sería así un “teatro privado para los gobernantes, donde ven su identidad retratada, confirmada y justificada”. Una cita de Inis Claude le sirve para ilustrar su argumento: “quienes detentan el poder sienten, como cualquier otro ser humano, la necesidad de satisfacer sus propias conciencias... necesitan algunas bases para convencerse a sí mismos de los derechos de su posición”. La legitimación sirve entonces, ante todo, para “consolidar a los grupos dirigentes, les provee de la auto-justificación que les permite a las elites reconocerse a sí mismas en su legitimidad social y gubernamental”.^{viii}

Desde esta perspectiva, el fracaso de la “auto-legitimación” tendría consecuencias desastrosas: “cuando ésta fracasa, fracasa el gobierno, éste, en efecto, deja de ser gobierno”. Barker observa que muchos de los estudios sobre el colapso de los regímenes comunistas en Europa oriental encuentran la explicación central en la falta de auto-confianza – “el fracaso de la auto-justificación de los gobernantes”. La desintegración de las elites y el fracaso de los mecanismos internos de autoridad habrían generado, según Paul Lewis, el colapso general de la legitimidad comunista.^{ix}

Barker cita también una hipótesis de Marcus Olson: las insurrecciones tendrían éxito no por la hostilidad de la población sino por los problemas, divisiones, y otras debilidades y fragmentaciones internas de los respectivos regímenes políticos. La conclusión de Barker es clara: “las crisis más serias de legitimidad para cualquier grupo dirigente son aquellas que ocurren no entre los súbditos sino en sus propias filas. Los regímenes pueden sobrevivir ausencias, fracasos o colapsos de legitimación entre sus súbditos. Ellos no pueden sobrevivir un colapso de legitimación dentro del personal del gobierno”^x.

He creído oportuno detenerme en las reflexiones de Barker porque me parecen directamente relevantes a la experiencia colombiana reciente. Es la pérdida de auto-confianza, en el seno mismo de la dirigencia nacional, lo que ha venido provocando problemas de legitimación. No se requerirían mayores esfuerzos para identificar en el lenguaje de quienes nos han gobernado en las últimas décadas – desde las distintas esferas gubernamentales –, expresiones que señalan, explícita o implícitamente, falta de convicción sobre la legitimidad del Estado. Dos ejemplos sirven de ilustración.

En 1996, el entonces coordinador de la oficina del Alto Comisionado de Paz, Daniel García-Peña, escribía: “la crisis de legitimidad es general y afecta a todos por igual: las instituciones, los partidos y el sistema político, las guerrillas, los gremios, los sindicatos...”^{xi} Adviértase la equiparación absoluta entre las instituciones del Estado y la sociedad y la guerrilla. Las expresiones de sentirse gobernando bajo títulos débiles son a veces más sutiles. El 23 de agosto pasado, el Ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero, manifestaba en un noticiero de televisión que a este gobierno se le había elegido con la finalidad de “devolverle legitimidad a las instituciones políticas”.^{xii} Solo se devuelve lo que ya no se posee.

“Si se pierde la convicción en la propia legitimidad, en la buena razón de Estado, lo demás es imposible”, escribió el constitucionalista español Francisco Tomás y Valiente. Recién inaugurado el nuevo gobierno del Presidente Uribe, elegido por una mayoría contundente en primera vuelta, parecería el momento adecuado para articular y fortalecer un discurso que consolide – y hasta restaure en algunos casos – la auto-confianza. En sus palabras de aceptación de su triunfo electoral, Uribe observó: “dentro de pocos días las elecciones serán lo de menos. Aquello que legitimará o deslegitimará al gobierno será la acción diaria y en eso los miles de colombiano que ayudaron en todas las regiones serán los colaboradores, serán los fiscales”. Pero, si las observaciones de Barker son acertadas, el reconocimiento y reafirmación que el Estado necesita sobre su propia legitimidad no es sólo el de la calle o el del mercado, sino quizá de manera más significativa el de quienes lo dirigen en sus más distintos niveles.

-
- ⁱ Ana Carrigan, “Looking for allies in Colombia, *The New York Times*, marzo 10 de 2002.
- ⁱⁱ “The technocrat of steel”, *Time*, junio 10 de 2002.
- ⁱⁱⁱ Habría que advertir también que dichos juicios en medios extranjeros les están haciendo eco a juicios similares emitidos por analistas nacionales. En un informe reciente, un investigador social, quien pidió “reserva de su nombre”, manifestó: “Que la guerrilla está derrotada políticamente, nadie lo pone e duda... Lo que casi nadie dice es que el Estado también está derrotado políticamente”, “Quinto frente: ¿Y la relegitimación del Estado?”, *El Tiempo*, agosto 18 de 2002.
- ^{iv} Jesús Antonio Bejarano, *Una agenda para la paz* (Bogotá, 1995)
- ^v Véase mi ensayo sobre el tema publicado en *Carta Financiera* (Bogotá: Anif, 2001), y “Doing something in Colombia”, Inter.-American dialogue Working Paper, agosto de 2002.
- ^{vi} Barker, *Legitimizing identities* (Cambridge, 2001).
- ^{vii} *Idem.*, p.12.
- ^{viii} *Idem.*, p.50.
- ^{ix} *Idem.*, p. 65.
- ^x *Idem.*, p. 68.
- ^{xi} “La guerra de los ocho mil días”, *El Tiempo*, junio 23 de 1996.
- ^{xii} Caracol televisión, agosto 23 de 2002.